

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Nueve (09) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 553

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	MESA CUADRADA S.A.S
DEMANDADO	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
RADICADO	76001-33-33-001-2021-00185-00

I. Asunto:

Procede el Despacho a decidir de fondo la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante.

II. Antecedentes:

Mediante auto de sustanciación nro. 667 del 12 de octubre de 2021, se ordenó correr traslado a la **Corporación Autónoma Regional del Valle - CVC** de la solicitud de medida cautelar invocada por la entidad demandante **Mesa Cuadrara S.A.S.**¹.

El extremo pasivo, dentro de la oportunidad procesal, presentó escrito a través del cual descorre el correspondiente traslado².

III. De la solicitud realizada por la parte demandante:

En escrito separado le parte demandante solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, contenidos en las siguientes:

- Resolución 076 N° 0761-00438 del 23 de junio de 2021, proferida por la Dirección Ambiental Regional Pacífico de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, a través de la cual se sancionó a la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S, con multa y demás.

- Resolución 760 N°. 0761-000792 del 16 de octubre de 2020, proferida por la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la Corporación Autónoma Regional Pacífico Este, por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, modificando la Resolución 076 N° 0761-00438 del 23 de junio de 2021.

Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Que en las Resoluciones descritas se le impuso como sanción accesoria consistente en la presentación de planos de las memorias de diseño y planos del sistema de tratamiento de aguas residuales procedentes del mantenimiento de los corrales de la actividad bovina y que son utilizados para el riego de los potreros del predio La Cometa (incluyendo las aguas de

¹ Anexo nro. 008 del expediente digital.

² Anexo nro. 009 del expediente digital.

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00185-00

escorrentía y el tratamiento de modificaciones de concesión de superficiales a concesión de reúso). Lo anterior, sin tener en consideración que la mentada sanción no se encuentra estipulada por el legislador en la normatividad aplicable.

Que la autoridad se encuentra extralimitándose de sus funciones y asumiendo el papel de legislador al imponerle a la sociedad demandante unas sanciones que no se encuentran establecidas en la Ley.

Que a la luz del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, la última prueba incorporada al trámite administrativo de práctico y se allegó cuando el periodo probatorio ya había concluido, sin que la autoridad ambiental hubiere hecho uso de la prórroga que consagra la misma disposición de 60 días; violando en su sentir, el derecho fundamental al debido proceso que debe regir todo proceso sancionatorio ambiental.

Que la norma acusada como vulnerada en la Resolución atacada de ilegalidad (numeral 4º del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015) no puede ser imputada a la empresa Mesa Cuadrada S.A.S, toda vez que la autoridad ambiental competente no determinó la extensión de la prohibición de los vertimientos; obligación que se desprende de la lectura del artículo que constituyó la infracción imputada.

Que al interpretar la norma que se acusa como violada por la entidad demandante, concluyó que la prohibición de hacer la descarga es únicamente en el sector o área que establezca la autoridad competente y si esta no ha cumplido con su función de determinarla, consideró que la descarga en la zona anterior a la bocatomía no constituye infracción; violando el principio de tipicidad y legalidad del acto administrativo.

En consideración a lo expuesto, consideró procedente el decreto de la suspensión provisional alegada. Ello, pues se incurrió en violación de las normas superiores en las que debía fundarse.

IV.- Oposición a la medida:

La **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca** arribó pronunciamiento frente a la solicitud de medida cautelar petitionada por la parte demandante, indicando para el efecto que:

-. Los argumentos señalados por el actor en el escrito de la medida cautelar son los mismos objeto de discusión que se debatirán de fondo en la demanda, sin que considere que se viola la norma superior que conlleve a decretar la medida cautelar solicitada.

-. No demuestra el peticionario en el escrito de solicitud de la medida un perjuicio irremediable o una afectación grave que requiera una atención especial o urgente por parte del Juzgado.

-. Los actos administrativos objeto de nulidad corresponden a una sanción de multa por el valor de \$89.057.665 impuesta por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca a la **Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S.** por la infracción de normas ambientales, se precisa que aquella, no vulnera derechos al demandante que requieran una especial protección por parte del Juez administrativo.

-. El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 faculta a la Corporación Autónoma Regional del Valle a imponer diversas sanciones, en el evento en que se estén transgrediendo normas ambientales.

-. No justifica el demandante el estudio juicioso y anticipado que debe realizar el juez administrativo en la solicitud de medida cautelar, cuando la normatividad le otorga otras

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00185-00

herramientas que suspenden los efectos. Razón por la cual solicita no conceder la medida cautelar peticionada.

-. Los cargos formulados por la CVC a la accionante son la transgresión de los artículos 2.2.1.1.18.2, 2.2.3.3.4.1 y 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, no obstante en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental se pudo evidenciar la vulneración de los numerales 4 y 9 del artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 10763 de 2015, por lo cual fue sancionado.

-. La infracción a la norma ambiental, no fue desvirtuada por la sociedad demandante, pues la CVC pudo verificar de primera mano que la parte demandante estaba realizando vertimientos derivados de la actividad ganadera arriba de la bocatoma AUSUANABI ubicada en el corregimiento de Bitaco del municipio de la Cumbre.

-. En el expediente sancionatorio ambiental, se observa el oficio nro. 0751-619392018 del 29 de octubre de 2018, por medio del cual se realiza un requerimiento a la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S para que realice canalización de aguas lluvias en el término de 30 días y así, evitar vertimientos derivados de la actividad ganadera arriba de la bocatoma AUSUANABI.

-. Igualmente, obra informe de visita técnica de fecha 06 de diciembre de 2018, en el cual se manifiesta el incumplimiento al requerimiento realizado por la CVC a través de Oficio 0751-619392018 del 29 de octubre de 2018, evidenciándose entonces que no existe falsa o falta motivación a los actos administrativos demandados.

-. La CVC se encuentra plenamente facultada para realizar el procedimiento sancionatorio adelantado contra la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S. (numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y artículo 5° de la Ley 1333 de 2009).

-. La entidad demandada respeto al demandante el derecho al debido proceso, contradicción y defensa, aspectos que revisten de legalidad los actos demandados.

-. Dentro del procedimiento sancionatorio, es evidente que la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S, hizo uso de su derecho de defensa, presentando descargos, pruebas, alegatos de conclusión y los recursos contemplados por las normas.

Así entonces, indicó que no observa violación a normas superiores la cual sea evidente, palmaria u ostensible que conlleve a la necesidad de realizar una reflexión minuciosa por parte del Juez Administrativo para evitar un daño gravoso al interés público o al demandante, pues lo solicitado es objeto de discusión a través del presente medio de control.

Por consiguiente, ante los argumentos puestos de presente, pide no conceder la medida cautelar solicitada.

V.- Consideraciones:

En principio, debe señalarse que, el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la procedencia de las medidas cautelares, así:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,

provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. ...”

Así mismo, el artículo 231 *ibídem* determinó cuales son los requisitos para decretar las medidas cautelares, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud" (Subrayas del Despacho).

Conforme a las normas antes descritas, es claro que, en primer lugar, la medida cautelar se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de las disposiciones invocadas en la demanda (siempre que a él se haga remisión expresa en la respectiva solicitud) o con fundamento en el escrito en que se realice la petición de la medida cautelar de forma separada, el cual debe contener una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida cautelar y, en segundo lugar, la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si, la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal – cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) *análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas*, o, ii) *del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*, sin que la decisión que asuma el Juez, implique un prejuzgamiento³.

De otro lado, es importante resaltar que, en lo concerniente a la suspensión de una decisión de la administración, la parte que así lo requiera debe cumplir unos requisitos mínimos, entre los cuales se encuentra la sustentación debida de su solicitud, lo cual puede hacer, en el mismo escrito inicial o en el escrito que de ella haga de manera separada.

En este punto es menester señalar, que frente a la sustentación de la medida cautelar el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Administrativa ha indicado, que si bien el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo habilita al juez de conocimiento para decretar la misma a partir de la confrontación que haga entre el acto, las normas invocadas como trasgredidas y las pruebas allegadas para tal fin, lo cierto es que la parte que pretenda hacer valer dicha figura jurídica debe cumplir con una mínima carga procesal que le permita al administrador judicial tener la claridad suficiente para llevar a cabo aquella valoración tanto normativa como probatoria que exige la norma en mención; es decir, que se debe indicar de forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran infringidas, llevando a cabo la debida explicación o sustentación de los motivos por los cuales considera que se vulneran las mismas⁴.

Lo anterior, tiene como soporte garantías de rango constitucional como el derecho de defensa y contradicción de la parte contra la cual se aduce la respectiva medida cautelar, teniendo en cuenta que es a partir de los argumentos que refiera la parte solicitante, que el otro extremo litigioso tiene la oportunidad de pronunciarse frente a lo deprecado; amén de que, también representa para el operador judicial el punto de partida para identificar la controversia y definir si es necesario ordenar una medida previa con el fin de asegurar el objeto del respetivo medio de control.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Auto de 3 de diciembre de 2012, exp. 11001-03-24-000-2012-00290-00.

⁴ Auto del 21 de octubre de 2013, Rad. 11001 0324 000 2012 00317 00, C.P. Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA

Así las cosas, se tiene que para el caso de la suspensión de actos administrativos, dicha Corporación ha señalado que la sola afirmación de un presunto desconocimiento del ordenamiento jurídico no puede tenerse como válido para acceder a una medida en dicho sentido:

“(...) debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

*A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, **la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior**”⁵ (Negritas y Subrayas del Despacho).*

Tomando como marco de reflexión lo expuesto en precedencia, es claro que se debe exigir a quien solicita una medida cautelar, una carga en cuanto al sustento y pruebas sobre la violación de las normas que considera vulneradas, para que se pueda efectuar en debida forma el debate en ese primer momento procesal.

Por otro lado, es del caso resaltar que el Despacho no desconoce que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 establece que la cautela de suspensión de un acto procederá “*por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado*”, no obstante, es claro que no debe confundirse la sustentación que respecto a la demanda debe hacer la parte actora, con la carga argumentativa que debe cumplirse al momento de solicitar una medida cautelar; es decir, que si el accionante decide presentar la solicitud de la medida en el mismo escrito de la demanda, debe sustentar en debida forma la misma o en su defecto, efectuar una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación advertido en el libelo inicial⁶.

Aunado a lo expuesto, debe decirse que el Órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo⁷, ha indicado que:

⁵ Ibídem.

⁶ Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 3 de marzo de 2016, radicación N° 11001-03-28-000-2016-00007-00 (2016-00007-00) C.P. dr. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 26 de noviembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00023-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, ii) auto del 26 de noviembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00026-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, iii) auto del 4 de febrero de 2016, radicación N° 11001-03-28-000-2016-00003-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta, iv) auto del 7 de septiembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00020-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta y v) auto del 5 de junio de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2014-00129-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.

⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00032-00(3007-14).

*“(…) La Constitución Política en el artículo 238⁸ otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo **la facultad de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.***

El legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, amplió el catálogo de las medidas cautelares que en la Constitución Política⁹ y en el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,¹⁰ se referían únicamente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por uno más extenso de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión.

*En cuanto a la oportunidad para solicitarlas indica el artículo 229¹¹ del CPACA que, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, **con el fin proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.***

*Así mismo el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **prevé que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** De manera que, su procedencia está determinada por la transgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva. La norma señala expresamente lo siguiente: (…)*

Según la regla precedente, podrá decretarse la medida cautelar cuando se cumplan los siguientes requerimientos: a) que así lo solicite y fundamente en debida forma la parte interesada en la demanda o con escrito anexo a la misma; b) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; c) o que emerja de los medios de prueba aportados por el interesado y, d) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Debe indicarse como la jurisprudencia ha resaltado, que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»¹².

⁸ Constitución Política. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

⁹ Constitución Política, artículo 138.

¹⁰ Decreto 01 de 1984, artículo 152.

¹¹ Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.¹¹

¹² Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00185-00

De conformidad con el aparte jurisprudencial y las normas citadas, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Que se trate de proceso de naturaleza declarativa.
- Que la medida cautelar se torne necesaria para proteger y garantizar, de manera anticipada y provisionalmente, el objeto del proceso.
- Que la violación surja de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud cautelar, por confrontación del acto administrativo demandado con las normas señaladas y las pruebas que soportan la solicitud.
- Prueba siquiera sumaria del perjuicio, en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Acorde con lo anterior, es a partir del análisis de los fundamentos de derecho y concepto de violación que se anuncian como trasgredidas con la expedición de los actos cuyos efectos de solicita suspender, y/o del material probatorio allegado al proceso hasta la instancia procesal de la solicitud, que el juez debe determinar si resulta viable el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

VI. Análisis del caso:

En primer lugar, debe precisarse que si bien, la procedencia de la medida cautelar se justifica por la contravención palmaria y evidente del ordenamiento jurídico, para demostrar dicha situación la parte interesada debe efectuar un análisis de las disposiciones que se señalan infringidas con la decisión de la administración y acreditar probatoriamente la vulneración legal.

En este contexto, es claro que, para considerar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo demandado, a la luz de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, es necesario que se acrediten de manera concurrente los cuatro presupuestos referenciados en líneas anteriores.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que a través de los actos administrativos descritos en el escrito de medida cautelar, contenidos en:

- Resolución nro. 0760 nro. 0761-00438 del 23 de junio de 2020, se dispuso declarar responsable a la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S. del cargo primero formulado mediante auto 0760-761 nro. 000052 del 27 de mayo de 2019. En consecuencia, se le impuso como sanción principal multa de \$247.078.712,66.

salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que '[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento'. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces 'la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite' []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o 'prejuzgamiento' de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia"

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00185-00

Igualmente, se le impuso como sanción accesoria la presentación de las memorias de diseño y planos del sistema de tratamiento para las aguas residuales procedentes del mantenimiento de los corrales de la actividad bovina y que son utilizadas en el riego de los potreros del predio La Cometa, también la inclusión de aguas de escorrentía que se generan en los caminos de tránsito del ganado hacia el lugar de ordeño y el trámite de modificación de la concesión superficiales a concesión de reuso, situación que debe realizarse en el término de un mes.

- Resolución 0760 nro. 0761-000792 del 16 de octubre de 2020, por la cual se denegó la pretensión principal de nulidad, se repuso parcialmente la Resolución anterior y, en consecuencia, se modificaron los artículos primero y segundo, así entonces, se declaró a la Sociedad Mesa Cuadrara S.A.S responsable de vulnerar los numerales 4 y 9 del artículo 2.2.3.3.4.3. Decreto 1076 de 2015, de conformidad con el cargo formulado a través del Auto nro. 07690-0761-000052 de 2019, exonerándolo de vulnerar los artículos 2.2.1.1.18.2 y 2.2.3.2.2.4.

Aunado a lo anterior, se impuso como sanción principal una multa de \$89.057.665, se denegaron las demás pretensiones del recurso y se concedió el recurso de apelación ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC.

Lo anterior, producto de una investigación ambiental que se suscitó en contra de la parte actora, como consecuencia de una visita realizada el día 06 de diciembre de 2018, al predio La Cometa, vereda la Estrella y corregimiento de Bitaco, en donde se evidenció que se generan vertimientos en la zona de protección hídrica de la quebrada Zaragoza, la cual abastece el acueducto ASUANABI, proveniente del lavado de establos.

Así las cosas, se examinará en este caso el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la ley, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional.

Arguye el demandante, que la sanción accesoria impuesta no se encuentra estipulada por el legislador en la normatividad aplicable, por lo que la autoridad administrativa se encuentra extralimitándose de sus funciones y asumiendo el papel del legislador.

Manifiesta que, la última prueba arribada al expediente fue incorporada al trámite administrativo se practicó y se allegó cuando el periodo probatorio ya había concluido, a la luz de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009; violando en todo caso el debido proceso.

Expone que la norma acusada como vulnerada (numeral 4° del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015), no puede ser imputada a la entidad actora, pues la autoridad no determinó la extensión de la prohibición de los vertimientos.

Por último, manifestó que al interpretar la norma que se acusa como violada, concluye que la prohibición de hacer la descarga es únicamente en el sector o área que establezca la autoridad competente, sin embargo, la entidad accionada no cumplió con la función de determinarla violando el principio de tipicidad y legalidad del acto administrativo.

De los argumentos presentados, encuentra el Despacho que más que discutir la violación a disposiciones invocadas por parte de los actos administrativos descritos de manera previa, lo que pretende la parte actora con la medida cautelar, es que se declare que su actuar no es susceptible de sanción ambiental alguna. Si se tienen en cuenta los siguientes considerandos:

Extralimitación de Funciones:

Frente a la extralimitación de la funciones alegada al imponer la sanción accesoria descrita con anterioridad, debe decirse que el artículo 1 y el parágrafo 1º del artículo 40 habilita a la autoridad administrativa a imponer al demandante las acciones correspondientes con el fin de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectado.

De esta manera, la sanción consistente en *“la presentación de las memorias de diseño y planos del sistema de tratamiento para las aguas residuales procedentes del mantenimiento de los corrales de la actividad bovina y que son utilizadas en el riego de los potreros del predio La Cometa también se debe incluir las aguas de escorrentía que se generan en los caminos de tránsito del ganado hacia el lugar de ordeño y el trámite de modificación de la concesión superficiales a concesión de reúso”* se emitió en estricto apego a la normatividad aplicable y aplicando el principio de proporcionalidad, con la finalidad de ejercer su función correctiva y compensatoria¹³.

Prueba incorporada por fuera del periodo probatorio:

Revisado hasta este momento procesal los apartes del expediente administrativo arribado tanto por la parte demandante, como por la parte demandada Corporación Autónoma del Valle del Cauca, se advierte que, en primera oportunidad se emitió el auto nro. 0760-0761 nro. 000088 del 02 de mayo de 2019, por el cual se dispuso la realización de una visita técnica al predio denominado la Cometa para el día 15 de mayo de 2019, con el objeto de verificar lo indicado en los descargos respectivos. Decisión que, se notificó a la Sociedad actora el día 13 de mayo de 2019.

No obstante en lo anterior, mediante Concepto Técnico del 17 de junio de 2019 y una vez se realizó la visita técnica, se dispuso que para establecer la responsabilidad de la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S, se debían realizar estudios de caracterización de 3 puntos de interés: 1. Bocatoma nro. 1 del Acueducto de Bitaco, 2. Descarga de la quebrada afluente a la quebrada Zaragosa y 3. Bocatoma nro. 02 del acueducto de Bitaco.

De la Resolución nro. 0760 nro. 0761-00438 del 23 de junio de 2020 se desprende que los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados por el laboratorio ambiental en los puntos descritos fue arribado al proceso administrativo el día 06 de agosto de 2019.

En consecuencia, a la fecha y de lo arribado al plenario la última prueba incorporada al expediente (Análisis bioquímicos y microbiológicos), fue radicada dentro de los términos y conforme a los parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, pues resulta evidente que para la obtención de los estudios adicionales necesarios, se debía disponer de un término superior a los primeros 30 días concedidos mediante el auto de pruebas.

No determinación de la extensión en donde se prohíben los vertimientos:

Frente a este argumento, debe decirse que el mismo trasciende el contenido del acto administrativo que se demanda, por lo tanto, acceder en este momento procesal a la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones nro. 0760 nro. 0761-00438 del 23 de junio de 2020 y 0760 nro. 0761-000792 del 16 de octubre de 2020, con la sola confrontación de la norma que aduce la entidad se encuentra infringida, podría constituir una decisión desproporcionada y contraria a los postulados constitucionales, pues no se cuenta con la totalidad del material probatorio, a efectos de determinar si la entidad accionada incurrió en un error al imponer las sanciones ambientales correspondientes.

¹³ Artículo 4 de la Ley 1333 de 2009.

En definitiva, en sentir de esta juzgadora, resulta indispensable realizar un análisis jurídico en torno a las disposiciones señaladas, acompañado de la práctica y valoración probatoria de la afirmación de ambos extremos, **ajeno a este momento procesal**, para decidir si se están violando las normas mencionadas o si la motivación se ajustó al ordenamiento jurídico, sin que lo expuesto implique un prejuizgamiento y de contera, la violación del debido proceso de cara al derecho de defensa de las partes.

Así las cosas, se negará lo solicitado, habida cuenta que es indispensable realizar un minucioso análisis que, en sentir del Despacho, **corresponde al momento de emitir sentencia de fondo**, amén de que, no se cumplen los requisitos establecidos para tal fin.

Finalmente, se advierte que no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que el apoderado judicial de la parte actora al momento de formular la medida de suspensión provisional, no refirió si quiera prueba sumaria para demostrarlo.

En síntesis, debe hacerse un estudio de fondo, con las pruebas aportadas al plenario, para determinar con certeza si efectivamente la **Corporación Autónoma Regional del Valle - CVC**, incurrió o no en un error al momento de declarar responsable a la Sociedad Mesa Cuadrada S.A.S del incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 9 del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, pues esta etapa procesal es apresurada para determinar tal situación.

Así las cosas, al no encontrarse configurada a partir de un ejercicio de confrontación con la norma superior que se argumenta como violadas, una situación de manifiesto desconocimiento necesaria para decretar la suspensión provisional solicitada, se procederá a negar el decreto de la medida cautelar bajo análisis.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los actos descritos en el escrito de medida cautelar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriado este proveído continúese con el trámite del proceso.

TERCERO: Este Juzgado acatando el deber consagrado en el art. 46 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Radicación: 76001-33-33-001-2021-00185-00

✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12

(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

Firmado Por:

**Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e5c52d51f693e9b2db8f7fd29de6588863ba059e0e0baa12f028dc9374bd9504

Documento generado en 09/11/2021 03:34:04 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>